

nales en virtud de facultades extraordinarias concedidas por la Legislatura. Visto el parecer fiscal y las demás constancias de autos.

Considerando: que aun cuando los Estados de la federación en uso de su soberanía puedan dictar leyes para su régimen interior, tienen que sujetarse á las providencias constitucionales, y que en el presente caso el gobernador de Sinaloa, al expedir su decreto de 31 de Enero de 1870 imponiendo un derecho llamado del mercado á los efectos nacionalizados en otros Estados, al introducirse en el de Sinaloa sin permiso del Congreso general, ha hecho una violación expresa de las garantías otorgadas en la fracción 1ª del art. 112 del pacto fundamental de la República; se decreta: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Sinaloa, que en su parte resolutive manda en nombre de los poderes de la Union amparar y proteger á los señores Fortunato de la Vega y compañía, contra los efectos del decreto de 31 de Enero de 1870, expedido por el C. gobernador del Estado, en virtud de facultades extraordinarias que impone el derecho de mercado á los efectos extranjeros nacionalizados.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado remitente con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. *S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafuagua.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis María Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Agosto dos de mil ochocientos setenta y uno.—*H. Guzman.*

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila por la Sra. D<sup>a</sup> Luisa Ibarra de Zuloaga, por violación de las garantías constitucionales que aseguran la propiedad.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

De las constancias agregadas en este expediente, se desprende que la Sra. Ibarra de Zuloaga, solicita de ese Juzgado el recurso de amparo, por creer violada por el decreto núm. 123 del gobierno del Estado la garantía que le concede el art. 27 de la Constitución. El decreto mencionado impone en su artículo 49 una servidumbre á los terrenos de la propiedad de la reclamante, y el 6º autoriza al ejecutivo para que haga la expropiación necesaria por causa de utilidad pública y con arreglo á la ley. Ese Juzgado se ha servido pedir el informe respectivo al C. gobernador, que fué rendido segun consta de autos el 1º de Abril del presente año, y el cual manifiesta que no se había ejecutado lo dispuesto por la Legislatura en su decreto mencionado núm. 123. Posteriormente á este informe y en auto del 17 del mismo mes, ordenó vd. que se pidiera nuevo informe con justificación, el cual no ha sido rendido hasta hoy, sin embargo de que el C. gobernador sancionó el decreto, ordenando la observancia del reglamento á la ley núm. 123, agregado al expediente y publicado en la Villa de San Pedro el 20 del actual citado. Este reglamento cede á los vecinos de la Villa de San Pedro, diez y seis sitios de ganado mayor y dispone la manera de la medición etc., etc.

El reclamante hace valer en su ocursio de fojas 1ª, dos hechos: primero, que se ha atacado su propiedad imponiendo una servidumbre, y segundo, que se autorizó al ejecutivo para que si lo creyere necesario hiciese la apropiación de la misma propiedad: trataré pues estos dos puntos.

Aparece plenamente probado en el expediente, que en terrenos de la hacienda de San Lorenzo, se han abierto canales con el objeto de traer el agua del río Nazas para regar las propiedades de la villa de San Pedro (declaraciones de testigos.) Toda servidumbre es una carga, y pues se ha hecho uso de la propiedad ajena sin previa indemnización, como lo ordena el artículo 27 de nuestra carta fundamental, es fuera de duda que ha habido una violación flagrante de una de las garantías de toda sociedad.

El presente juicio prueba la falta de voluntad de la propietaria para permitir en sus terrenos servidumbre de ninguna clase; que es verdad que puede alegarse utilidad pública porque mejora la condición de todo un pueblo, es también evidente que no se ha cumplido con las prescripciones, que no ha habido previa indemnización, condición *sine qua non* nada son las leyes que ordenan la expropiación.

Fáltame para concluir, tocar el otro punto que señala la ocursante, y es el supuesto caso de que el ejecutivo disponga que el fundo á la villa de San Pedro lo formen también terrenos de la propiedad de la Sra. Zuloaga. No se ha probado en autos que haya habido esta violación; pero como el decreto núm. 123 faculta al ejecutivo para que haga la expropiación necesaria y que juzgue conveniente, y como ni esa ley ni el reglamento de 20 de Abril, dejan la manera de indemnizar á la propietaria en caso de que tal disposición se lleve al cabo, creo de justicia se le ampare contra los efectos del decreto núm. 123 expedido por esta Legislatura.

Concluyo este alegato pidiendo á vd. se sirva decretar.

Que la justicia de la unión ampara y protege á la Sra. D. Luisa I. de Zuloaga, contra los efectos del decreto núm. 123 de la Legislatura de este Estado.

Tal es lo que en conciencia le ha pare-

cido pedir al C. Jefe de hacienda que suscriba, y que sujeta á su recto juicio.—Firmado.—H. C. Yach.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Saltillo, Julio tres de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos en el presente juicio de amparo el recurso presentado por el C. Lic. Ignacio Galindo en representación de la Sra. D<sup>a</sup> Luisa Ibarra de Zuloaga, pidiendo se le ampare contra lo dispuesto en los artículos 49 y 69 del decreto núm. 123 expedido por la Legislatura del Estado con fecha 20 de Febrero del corriente año, por estar con ellos violadas, en su concepto, las garantías que le otorga á su representada el art. 27 de la Constitución federal; el informe con justificación rendido con fecha 20 de Junio por el gobierno del Estado, en el cual expresa, que aun no se ponen en ejecución los mandatos á que se refiere el referido decreto: que por lo mismo no hay acto que pueda decirse reclamado, y que el H. Congreso expidió su decreto núm. 123 y el gobierno á su vez ha acordado el reglamento respectivo, designando la autoridad que debe encargarse de su ejecución, la que cuando el caso llegue debe ser la que ha de dar el informe que se pretende como inmediata ejecutora del acto reclamado, de conformidad con lo que previene el art. 59 de la ley de 20 de Enero de 1869; y que teniendo la mejor disposición de que se respeten los derechos de la Sra. Ibarra, del modo mas eficaz se la dirigido á ella, como se ve por la copia que acompaña á este informe, consultándole su voluntad, para que en caso de que alguna parte de los terrenos que ocupan los vecinos de la Villa de San Pedro, resulten ser de su propiedad, al hacerse la medición de ellos, tenga la bondad de expresar cual sea el precio que les fija; lo pedido por el Jefe superior de hacienda en sustitución del promotor fiscal de este juzgado: las pruebas rendidas

por el quejoso; los alegatos respectivos de las partes; el auto de citacion para sentencia, y todo lo demas que de autos consta se tuvo presente y ver convino.

**Considerando:**

Primero; que por la ejecutoria de 14 de Marzo del corriente año de la Suprema Corte de Justicia de la nacion, está declarado: 1º *Que los Estados son libres é independientes en lo que concierne á su régimen interior, y por lo mismo á ellos toca hacer la designacion de Distritos, municipalidades y congregaciones en su respectivo territorio, de la manera mas conveniente para su organizacion.* 2º *Que es un principio reconocido de utilidad pública, la mejora, el progreso de las poblaciones establecidas y la creacion de nuevas.*

Segundo; que se asimismo, segun el art. 4º de la ley de siete de Julio de 1853, una obra de utilidad pública la apertura de canales en los rios, ya sea emprendida por la Administracion suprema, por los Estados, Distritos, Ayuntamientos, por individuos ó corporaciones particulares.

Tercero; que segun el art. 6º del referido decreto, la ocupacion de las tierras necesarias para el objeto á que se refiere el art. 4º debe hacerse, previos los requisitos que establecen las leyes, en caso de que no pueda verificarse por convenios amistosos con los dueños, y con lo cual llena el expresado decreto los requisitos constitucionales fijados para la expropiacion, y no se violan en manera alguna las garantías que otorga el art. 27 de la Constitucion federal.

Cuarto; que segun se deja ver por el informe del C. Gobernador, aun no se pone en ejecucion el decreto y reglamento expedido por este y por el Congreso del Estado.

Quinto; que por parte del quejoso no se ha probado se hayan abierto tajos nuevos por los vecinos de S. Pedro despues de expedidos el decreto y reglamento mencionados, sino tan solo, y esto cuando aún la hoy Villa de S. Pedro era una simple con-

gregacion y no se habian expedido las disposiciones citadas, que al Norte de S. Lorenzo de la Laguna y por órden del juez auxiliar de la referida congregacion, se abrió por los vecinos de esta un canal que atraviesa las tierras de la Sra. Ibarra su poderdante, y *contra cuyos actos ha pedido ya la reparacion correspondiente y obtenido un fallo favorable*, segun lo afirma en sus respectivos alegatos que corren á la foja 16 vueltas de estos autos.

Sexto; que por las declaraciones de los testigos de (fojas 10, 11, 12, 13 y 14) está probado que la Villa mencionada está fundada en los terrenos conocidos con el nombre de Mayrán, pertenecientes á la municipalidad ó vecindad de Parras de la Puente, los cuales segun lo expresa el quejoso (á fojas 16 de estos autos) son 38 sitios.

Sétimo; que ni ha probado que en los diez y seis sitios mandados repartir por el reglamento ya citado, esté comprendida parte de los terrenos pertenecientes á la Sra. supoderdante y que su reparto ó ocupacion se haya llevado á efecto, salvando los requisitos constitucionales á que se refiere el decreto ya mencionado en su art. 6º

Octavo; que habiendo el quejoso consentido y acatado lo dispuesto en el decreto núm. 88 relativo á la fundacion de la colonia, y expedido el 20 de Enero de 1870, segun lo expresa en sus alegatos respectivos (fojas 16) no puede en buen derecho interponer queja alguna contra los actos que antes de él ó en virtud de él se consumaron.

Por estas consideraciones, el juzgado de Distrito de Coahuila de Zaragoza declara:

Primero; que la justicia de la Union no ampara ni protege al C. Lic. Ignacio Galindo, representante de la Sra. Dª Luisa Ibarra de Zuloaga, contra el decreto núm. 123 expedido por el II. Congreso del Estado con fecha 20 de Febrero del presente año.

Segundo; que así mismo no lo ampara ni

protege contra lo dispuesto en el reglamento del gobierno del Estado, expedido el 20 de Abril del corriente año.

Tercero; que de conformidad con la ley, se remitan estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision, publicándose esta sentencia despues de notificarse á quienes corresponda. Así definitivamente juzgando lo decretó mandó y firmó el C. juez de Distrito del Estado, por ante mí, doy fé.  
—Lic. Mariano Sanchez.—Florentino Seguen. secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Julio veintiseis de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 26 de Marzo del corriente año, promovió ante el Juez de Distrito del Estado de Colima el C. Lic. Ignacio Galindo en representacion de la Señora Doña Luisa Ibarra de Zuluaga, alegando que la legislatura de ese Estado ha expedido el decreto núm. 123 fecha 24 de Febrero último; que el art. 49 de este decreto, da á los habitantes de la Villa de San Pedro derechos de servidumbre para tomas de agua del rio Nazas; el art. 69 concede al gobierno la facultad de expropiar, en el evento de que juzgue necesario ocupar terreno de propiedad particular, si por convenios amistosos con el propietario este no se avienere en cederla para los habitantes de la propia Villa; y que con esas disposiciones que imponen al dueño del predio contiguo cargas, mandan ocupar sus tierras sin su beneplásito y le privan del derecho que tiene á las corrientes del Nazas, se viola la garantía que le otorga el art. 27 de la Constitucion federal.

Vistos los informes del C. gobernador de Coahuila, autoridad contra quien se dirige el recurso, manifestando: que si bien existe el decreto á que se contrae el promoviente, no se habian puesto en ejecucion

sus mandatos, que el rio Nazas es del dominio público y pueden los vecinos de San Pedro aprovecharse de sus aguas; que la mayor parte de los terrenos aludidos por el apoderado de la Señora Ibarra, son de dudosa propiedad para ella habiendo un juicio de apco y deslinde pendiente, y una denuncia de los sobrantes calificada de buena por el Juzgado de Distrito; pero que por evitár males, en caso de expropiacion, el gobierno habia ocurrido á la Señora consultando su voluntad de vender y el precio en que se fijara.

Vistos los pedimentos del C. Promotor fiscal concretando la cuestion en el primero, supuesto no haberse ejecutado el decreto de la Legislatura, á la de un amparo que se solicita conforme á la fraccion 19 del art. 101 de la Constitucion federal por una ley que viola las garantías individuales; y pidiendo en el 29, que se acceda á la proteccion que la quejosa demanda en este juicio.

Vistas las pruebas rendidas por el representante de la Señora Ibarra de Zuluaga; el alegato de buena prueba que presentó, pidiendo tambien que se ampare á su representada contra las prevenciones del reglamento del decreto núm. 123 antes citado y del núm. 83 cuyo reglamento fué expedido por el gobernador dicho en 20 de Abril último y trata de la ocupacion de terrenos para la Villa de San Pedro: por último, vista la sentencia del Juez de Distrito con todo lo demas que de autos consta y ver convino. Considerando:

Primero; que el amparo que se pretende es contra los artículos 49 y 69 del decreto núm. 123 y contra el reglamento del gobernador, no contra actos emanados de esas disposiciones, pues aparece que aun no se han puesto en ejecucion.

Segundo: que respecto de los artículos del decreto núm. 123, procedería el recurso intentado, si las prevenciones que hacen sobre la ocupacion de la propiedad se hubieran dictado en contra de los requisitos en

establecidos por el art. 27 de la Constitución federal, no como se han dictado, llenando esos requisitos supuesto que se manda practicar la ocupación según las leyes.

Tercero; que respecto del reglamento, según el informe del C. gobernador, cuando llegue el caso de ocupar algunos terrenos que resulten al hacer la medición, ser de la propiedad de la Señora Ibarra, sus derechos serán respetados de la manera mas eficaz. Por lo expuesto que demuestra no haber la violación de garantías que ha invocado el representante de la quejosa, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869: se resuelve, que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Coahuila pronunciada en tres de este mes, en virtud de la cual declara:

Primero; que la justicia de la Union no ampara ni protege al C. Lic. Ignacio Galindo representante de la Señora Doña Luisa Ibarra de Zuhaga, contra el decreto núm. 123 expedido por el honorable Congreso del Estado, con fecha 20 de Febrero del corriente año.

Segundo; que así mismo no lo ampara ni protege contra lo dispuesto en el reglamento del gobierno del Estado, expedido en 20 de Abril de este año.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia por los efectos consiguientes: pùbliquesse por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*José García Ramírez.*—*M. Zavala.*—*S. Guzman.*—*M. Auza.*—*J. M. Infraña.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico México, Julio

treinta y uno de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta* oficial mayor.

## PAPEL SELLADO.

*Juicio seguido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, contra D. Tomás Cantu, sobre cobro de una multa por infracción de la ley de papel sellado.*

### PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que se le ha pasado este expediente formado con motivo de la multa, que se impone á los fiadores del extranjero D. Guillermo A. Cook, para que ejerza su ministerio, y supuesto su estado que es el de hacer aplicación de pruebas, pasa el fiscal á emitir su parecer en vista de las constancias todas recogidas en estos autos, y en vista de lo dispuesto por la ley para casos semejantes.

Dos son, en concepto del Fiscal, las cuestiones que hay que tratar para cerciorarse y venir en conocimiento de si procede ó no la multa que se exige, si debe ó no hacerse efectiva, por los capítulos antes expuestos, ó por algunos de ellos no procede la multa y por otros sí; esto es, si solo debe exigirse la que al principio se creyó justa y única conforme á la ley, y no así la otra, que se juzgó procedente por la cuenta de que se hizo mérito en unos documentos.

Sea la primera cuestion esta: los documentos, las copias autorizadas que se han presentado en estos autos extendidos en el papel sellado no correspondiente, causan ó no la multa que se exige. El señor apoderado de dichos fiadores sostiene, que no porque dice que esos documentos no son copias, aunque en ellos se han incluido futebras y con todas sus cláusulas unas escrituras de fianza, sino simples certificados que conforme á la fracción 1ª del art. 17